PROBLEMAS FISCALES PARA LOS CONSUMIDORES POR LAS SENTENCIAS EN MATERIAS DE CLÁUSULAS SUELO Y PREFERENTES

Paco Sanz, Responsable Departamento de Estudios ADICAE
Zaragoza 18 de mayo de 2016

ÍNDICE

PRIMERO.- PROBLEMAS FISCALES DE CONTRIBUYENTES TITULARES DE DEUDA SUBORDINADA O PARTICIPACIONES PREFERENTES CUYOS CONTRATOS HAYAN SIDO DECLARADOS NULOS MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL

- A.- CUESTIONES FISCALES PROBLEMÁTICAS PARA LOS CONSUMIDORES
- B.- ARGUMENTOS Y CRITERIOS PARA RECLAMAR
- C.- PROCESO PARA RECLAMAR
- D.- OTRAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE ADICAE

SEGUNDO.- TRIBUTACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS POR EL BANCO CONSECUENCIA DE LA ANULACIÓN POR SENTENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO

- A.- EN CASO DE DEDUCCIÓN DE VIVIENDA HABITUAL
- B.- EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA DEDUCCIÓN EN VIVIENDA HABITUAL
- C.- GASTOS HABIDOS E INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR EL CONSUMIDOR RECONOCIDOS EN SENTENCIA

PRIMERO.- PROBLEMAS FISCALES DE CONTRIBUYENTES TITULARES DE DEUDA SUBORDINADA O PARTICIPACIONES PREFERENTES CUYOS CONTRATOS HAYAN SIDO DECLARADOS NULOS MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL

A.- CUESTIONES FISCALES PROBLEMÁTICAS PARA LOS CONSUMIDORES

1) Sentencias que declaran la nulidad de los contratos de suscripción de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas y reconocen a favor del consumidor intereses legales a satisfacer por la entidad bancaria por el tiempo transcurrido desde el momento en que el cliente pagó el importe de las obligaciones subordinadas hasta la fecha de la sentencia.

(Consultas Tributarias V0676-16 de 18 de febrero de 2016; V 272-16 de 25 de enero de 2016; V 2061-15 de 02-07-2015; V 2062-15 de 02-07-2015; V3332-15 de 28-10-2015; V3639-15 de 23-11-2015; V3641-15 de 23-11-2015)

Tipos de intereses dictados en sentencia y su repercusión fiscal:

- Intereses indemnizatorios (interés legal)

Su finalidad es resarcir por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio tributan, según criterio de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) como ganancia patrimonial (artículo 33.1 de la Ley 35/2006). Su imputación temporal se hace al período impositivo de adquisición de firmeza de la sentencia (artículo 14.1. c) y 14. 2. a) de la Ley 35/2006).

- Intereses de mora procesal

Son también indemnizatorios pero en este caso por el tiempo transcurrido desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de pago. Han de tributar como ganancia patrimonial (artículo 33.1 de la Ley 35/2006)

2) Que la sentencia que declara la nulidad de los contratos de suscripción de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas obligue al pago de las costas procesales por parte de la parte demandada al consumidor contribuyente.

(Consultas Tributarias V0676-16 de 18 de febrero de 2016; V0675 de 18 de febrero de 2016; V 272-16 de 25 de enero de 2016; V 1794-08.)

En este caso, según las consultas respondidas por la AEAT, dado su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio (el consumidor), supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero constituyendo, según Hacienda por tanto una ganancia patrimonial.

B.- ARGUMENTOS Y CRITERIOS PARA RECLAMAR

1) Reclamación por la consideración de ganancia de patrimonio de los intereses legales a satisfacer por la entidad bancaria al consumidor.

La calificación fiscal que la AEAT realiza de los intereses legales reconocidos en sentencia que la entidad condenada debe satisfacer al consumidor es, como hemos visto, la de ganancia de patrimonio. Según el artículo 2 de la Ley 35/2006 del IRPF, el objeto de este Impuesto es la tributación por la renta del contribuyente que, entre otras, incluye *“la totalidad de ganancias y pérdidas patrimoniales”*.

Los perjuicios que ocasiona esta consideración fiscal para los contribuyentes que han sufrido un abuso en sus derechos es notable. Por un lado, gran parte de estos contribuyentes no tienen obligación de tributar (en particular quienes perciban pensión de jubilación, que en este caso son numerosos, o prestación por desempleo). El tratamiento fiscal como ganancia de patrimonio no sujeta a retención les obligaría a presentar declaración (Artículo 96. 2 b de la Ley 35/2006 del IRPF). Ello, en estos casos citados, generaría una cuota a ingresar ya que las rentas descritas carecen de retención (pensiones, prestaciones por desempleo).

Por otro, este tratamiento fiscal como ganancia de patrimonio impediría que se reconociera a otros muchos contribuyentes numerosos derechos. Así sucede, a modo de ejemplo, con las solicitudes de beca de estudios universitarios. En las bases de convocatoria de las mismas es habitual que para acceder a ellas no se pueda obtener dentro del año fiscal una ganancia patrimonial superior a una determinada cantidad (normalmente 1.600 euros). Esta consideración fiscal de las indemnizaciones como ganancia de patrimonio podría incrementar la base del contribuyente y superar los límites establecidos, por lo que podría no obtener la beca, con menoscabo así de sus derechos.

Entendemos en definitiva que la consideración fiscal establecida menoscaba los principios constitucionales recogidos en el artículo 31.1 y 51.1 de la Constitución. No parece justo que ante una situación que nunca debió producirse y que origina el lógico ejercicio de la tutela judicial de los derechos por parte del consumidor, su resarcimiento se considere como ganancia de patrimonio. Ello supone ignorar por parte de la administración tributaria el principio pro consumidor que establece el artículo 51.1 de la Constitución, estableciendo así una barrera o mecanismo desincentivador para ejercer estos derechos y tutelarlos eficazmente como exige el mencionado artículo.

2) Reclamación por la consideración de ganancia de patrimonio de las costas procesales abonadas en virtud de sentencia por la parte demandada al consumidor.

Por su parte, la calificación fiscal que la AEAT realiza de las costas reconocidas en sentencia a favor del consumidor es también la de ganancia de patrimonio.

Los gastos por abogado y procurador responden a los gastos necesarios que debe soportar un consumidor para afrontar un juicio en defensa de sus derechos vulnerados por la entidad que en estos casos es condenada a abonarlos. No se consideran siquiera una pérdida de patrimonio ni pueden deducirse como gastos, ya que fiscalmente se definen como “pérdidas debidas al consumo” (como expresamente artículo 33.5 b de la ley del IRPF). Entendemos que no responde al principio de justicia del artículo 31.1 de la Constitución, el hecho de que considerando estos gastos como “pérdida”, puedan originar sin embargo una “ganancia” por el hecho de ser compensados por el banco al abogado del consumidor.

Se produce además discriminación con otras situaciones similares. En efecto, se permite que en demandas contra una entidad financiera por “cláusula suelo” puedan deducirse los gastos de abogado y procurador asumidos durante el proceso judicial cuando en ellos incurra el consumidor. El argumento es que están destinados a la eliminación de la mencionada cláusula o a su reducción y por ello Hacienda los considera incluidos en concepto de gastos derivados de la financiación ajena con la que se ha procedido a adquirir la vivienda habitual, por tanto constituyen base de la deducción. (Consulta tributaria V0237-15 de 21/01/2015)

En el mismo sentido, tienen la consideración de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo personal en el IRPF, los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales (artículo 19 letra e) de la Ley del Impuesto IRPF.

De estas dos cuestiones se aprecia claramente una ruptura del “principio de igualdad” que establece el artículo 1 de la ley 35/2006 sobre IRPF, en base al 31.1 de la Constitución. A diferencia de estos dos supuestos, no sólo no se reconocen como gastos deducibles los de abogado y procurador en un procedimiento para la anulación de contratos de participaciones preferentes o deuda subordinada, sino que incluso se consideran ganancia de patrimonio cuando se condena por sentencia en costas a la entidad.

Por otro lado, hay que recordar que el artículo 33.1 de la ley del IRPF dice que tales ganancias y pérdidas patrimoniales son las “*variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente*” que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. En la mayor parte de los casos, la cuantía percibida se ingresa directamente por el banco en las cuentas respectivas del abogado y procurador. Por tanto, el “*valor del patrimonio del contribuyente*” no experimente ninguna variación, ya que no percibe nada en su patrimonio.

C.- PROCESO PARA RECLAMAR

1) Realizar la declaración de IRPF conforme a los criterios que establece Hacienda. Es decir, incluyendo como ganancia patrimonial los intereses y las costas reconocidos en sentencia.

La razón de ello es que, de conformidad al artículo 89 de la Ley General Tributaria, las contestaciones a las consultas tributarias escritas tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria. Por tanto, la AEAT va siempre a aplicar esos criterios y considerar los intereses y costas percibidos por el consumidor como ganancias de patrimonio y así lo van a exigir en tanto *“no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación”* (art. 89 LGT).

Si se presenta una autoliquidación por IRPF sin declarar tales ingresos como ganancias de patrimonio, la AEAT girará una declaración paralela, imponiendo sus criterios, además de intereses de demora y sanción (artículo 191 y siguientes de la LGT)

Por ello, entiendo que procede presentar la declaración conforme a los criterios de Hacienda sin perjuicio posteriormente para reclamar.

2) Solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y recurso administrativo posterior

El IRPF se declara, calcula y abona, en su caso, mediante autoliquidación que debe realizar el contribuyente (artículo 97.1 Ley 35/2006 del IRPF y artículo 120 de la LGT) No es por tanto un acto administrativo que se pueda recurrir. Cuando un contribuyente considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, puede instar a la AEAT la rectificación de dicha autoliquidación (artículo 120. 3. LGT y artículos 126 y siguientes del Real Decreto 1065/2007 Reglamento General de gestión e inspección tributaria)

Una vez que los contribuyentes presentan autoliquidación del IRPF conforme a los criterios de Hacienda ya expuestos, pueden presentar con posterioridad un escrito donde

inste una rectificación conforme a los criterios y argumentos que hemos señalado en la letra B) anterior.

Si Hacienda contestara afirmativamente dando la razón al contribuyente, se reconocerá en la resolución que dicte el derecho del contribuyente a obtener una devolución por ingresos indebidos (artículo 128 del Real Decreto 1065/2007 Reglamento General de gestión e inspección tributaria).

Si contestara negativamente, no reconociendo nuestros argumentos, dado que se trata de una resolución administrativa, podríamos interponer recurso de reposición (artículo 222 y ss. de la LGT 21 y siguientes del Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa) y/o reclamación económico- administrativa a través del Tribunal Económico-administrativo (pese a su denominación, no es un órgano jurisdiccional, sino administrativo, artículo 28 y siguientes del Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa). En esta vía, que es alternativa al recurso de reposición, hay que tener cautela porque según el Artículo 51. 1. del Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa, el Tribunal económico-administrativo podrá apreciar la existencia de temeridad o mala fe del reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del procedimiento cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude de ley o procedimental.

3) Posibilidad de presentar las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y recursos administrativos posteriores de forma colectiva o acumulada.

El Artículo 46 de la LGT se refiere a la representación voluntaria. Los obligados tributarios, es decir, los contribuyentes, podrán actuar por medio de representante. En general, para interponer recursos o reclamaciones, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente. Según el artículo 111 del Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa, en el caso de personas físicas con capacidad de obrar, la representación voluntaria será otorgada por ellas mismas. Hay que tener en cuenta que la representación podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas (por ejemplo ADICAE).

Asimismo, cabe la acumulación de actuaciones con carácter general en todos los procedimientos de naturaleza administrativa. Así lo dispone el artículo 73 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: *"el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión"*.

En materia tributaria en particular, el artículo 230 de la Ley General Tributaria regula la acumulación para las reclamaciones económico-administrativas (no específicamente para solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, o recursos de reposición que irían por el régimen general descrito en el párrafo anterior). En los supuestos concretos que analizamos es procedente acumular en las reclamaciones económico-administrativas *"cuando hayan sido interpuestas reclamaciones por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente o planteen idénticas cuestiones"*. En este sentido, el artículo 37 del Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa dice que el tribunal Económico-Administrativo, en cualquier momento previo a la terminación, de oficio o a solicitud del interesado, acordará la acumulación o la desacumulación, cuando varios interesados reclamen en un mismo escrito.

Propuesta: podrían elaborarse formularios tipo con los argumentos expuestos para que el consumidor solicitase una rectificación de su autoliquidación. Lo mismo para el recurso de reposición y/o económico-administrativo.

Otra fórmula sería iniciar una campaña para que los consumidores nos otorgaran su representación en la forma descrita y presentar un mismo documento y argumentario incluyendo los nombres y las autoliquidaciones de los consumidores que se adhieran. Considerados así como interesados en el procedimiento, en representación de un número determinado de socios, podríamos solicitar la acumulación de expedientes.

D.- OTRAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE ADICAE

Al margen de las vías de reclamaciones expuestas, propongo solicitar una reunión con

AEAT , el Ministerio de Hacienda para plantear algún tipo de propuesta para la regulación como exentas de los intereses y costas a favor del consumidor, en base a los argumentos planteados.

En particular, se pueden elevar todas estas cuestiones planteadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente (Artículo 34.2 de la Ley General Tributaria y Real Decreto 1676/2009 que regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente) Su objetivo es atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario, así como efectúa las sugerencias y propuestas pertinentes

SEGUNDO.- TRIBUTACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS POR EL BANCO CONSECUENCIA DE LA ANULACIÓN POR SENTENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO

A) EN CASO DE DEDUCCIÓN DE VIVIENDA HABITUAL

Si una cláusula resulta abusiva para el consumidor, por venir así reconocida por el juez en sentencia firme, la entidad o empresa que la impuso en el contrato debe eliminarla, así como sus efectos, desde el día en que se firmó en contrato. La consecuencia es que los costes que el consumidor hubiera pagado de más en virtud de dicha cláusula le serán devueltos, incluidos en su caso intereses. Es lo que sucede con la cláusula suelo.

Los consumidores que reciben estas cantidades devueltas reconocidas por sentencia, normalmente incluyeron como contribuyentes del IRPF lo pagado por su préstamo hipotecario en concepto de deducción por vivienda habitual. En este concepto se suma tanto lo amortizado en el año de capital principal como lo pagado por intereses, incluyendo como tales las cantidades que el banco les cobraba de más por la “cláusula suelo”. Ahora, si les devuelven las cantidades mal cobradas por el banco, deben proceder

a su regularización fiscal, ya que de la cuantía de deducción que en su día aplicaron tienen que restar lo que les devuelve su entidad.

En efecto, a juicio de la Agencia Tributaria la devolución por parte del banco de los intereses pagados por préstamos hipotecarios en virtud de la anulación de las cláusulas suelo no supondrá rendimiento o ganancia para el contribuyente “siempre que dichos intereses no hayan sido objeto de deducción por parte del contribuyente”. Por tanto, el contribuyente no integrará en su declaración las cantidades percibidas por la devolución de cantidades indebidamente cobradas por su banco como rendimiento ni ganancia de patrimonio.

Sin embargo, si dichos intereses formaron parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, “el contribuyente deberá proceder a regularizar las deducciones practicadas en aquellos ejercicios en los que incluyó en la base de la deducción los intereses devueltos mediante la presentación de las correspondientes declaraciones complementarias”.

La presentación de una “declaración complementaria” significa que respecto de los ejercicios pasados en los cuales se ha presentado declaración de la Renta con deducción de vivienda por las cuotas satisfechas del préstamo hipotecario, es necesario presentar una declaración de esos años para devolver la parte de las deducciones que ahora tu banco te devuelve.

Es importante tener en cuenta que el límite de deducción por vivienda habitual es de 9.015 euros. Si aún restando las cantidades que devuelve la entidad de crédito por la aplicación de la “cláusula suelo” se sigue superado ese máximo de base de deducción, en tal caso no hay que hacer declaración complementaria por las deducciones practicadas en exceso en su día. Ahora bien, en el caso de que restando los intereses que devuelven por aplicación de la cláusula suelo quedarán por debajo de la base máxima de 9.015 euros, sí hay que devolver los intereses deducidos en exceso mediante declaración complementaria. Es importante solicitar a la entidad un certificado que demuestre las cantidades devueltas por las devoluciones cuyo origen sea la cantidades mal cobradas por cláusula suelo. (AEAT INFORMA, cuestión número 137694)

Ejemplo:

Contribuyente A

- En 2014 pagó a su banco 10.000 euros del préstamo de su vivienda habitual (7000 capital y 3000 intereses, incluyendo los derivados de aplicar la cláusula suelo.)
- En su declaración de la renta de 2014 se dedujo por vivienda habitual 9.015 euros, que es lo máximo permitido (y no 10.000 euros que es lo que realmente pagó). Por tanto, no pudo deducirse 985 euros, la diferencia entre 10.000 y 9.015 euros.
- En 2015 gana por sentencia a su banco por la imposición de la cláusula suelo y le devuelven 400 euros.
- Si resta de los 3.000 euros que pagó de intereses los 400 de más que ahora le devuelven y que indebidamente por la cláusula suelo le cobró su banco y que incluyó como base de deducción, obtenemos que el total que debió deducirse como intereses era solo de 2.600, no 3.000 euros.
- Ahora bien, como la suma de los 7.000 euros de capital amortizado más 2.600 de intereses pagados sigue superando el límite máximo de 9.015 euros establecidos (9.600 euros) no debe hacer declaración complementaria, ya que sólo se benefició de una deducción de 9.015 euros.

Contribuyente B

- En 2014 pagó a su banco 6.000 euros del préstamo de su vivienda habitual (4.000 capital y 2.000 intereses, incluyendo los derivados de aplicar la cláusula suelo.)
- En su declaración de la renta de 2014 se dedujo por vivienda habitual esos 6.000 euros, que están por debajo de lo máximo permitido (9.015 euros).
- En 2015 gana por sentencia a su banco por la imposición de la cláusula suelo y le devuelven 200 euros.
- Si resta de los 2.000 euros que pagó de intereses los 200 de más que ahora le devuelven y que indebidamente por la cláusula suelo le cobró su banco y que incluyó como base de deducción, obtenemos que el total que debió deducirse realmente como intereses era solo de 5.800 euros, no 6.000 euros.

- Debe hacer declaración complementaria, esto es, volver a hacer una nueva declaración completa de aquel año (incluyendo todos los rendimientos, gastos y deducciones correspondientes al mismo) haciendo constar que se trata de una complementaria. En el apartado de deducción por vivienda habitual habrá que incluir la cantidad real; en nuestro ejemplo 5.800 euros, y no 6.000.
- Este año 2016, en el plazo de presentación de de la declaración de 2015 (mayo-junio 2016) hay que incluir la deducción correcta conforme a lo explicado, si la sentencia hace referencia a lo pagado en 2015. Así nos evitaremos hacer una complementaria.
- Habría que hacer este cálculo para cada año y presentar declaraciones complementarias distintas por cada uno de ello hasta el límite de 4 años del plazo de presentación de la renta, ya que operaría la prescripción para los anteriores. Ejemplo: la renta de 2014, se presentó en mayo-junio 2015. A fecha junio de 2016, esta es la fecha (junio de 2015) que hay que tomar como referencia para computar los 4 declaraciones anteriores que no están prescritas (hasta junio de 2012, que se refiere a la declaración del año 2011).

El supuesto descrito hasta aquí opera sólo en caso de que se hayan efectuado deducciones en concepto de “vivienda habitual” respecto de la que solicitamos en su día un préstamo hipotecario que incluía “cláusulas suelo” y que el juzgado declara nula con devolución de cantidades. Si se trata de una segunda vivienda vacía o segunda vivienda en alquiler, el régimen es distinto como veremos a continuación

B) EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA DEDUCCIÓN EN VIVIENDA HABITUAL

- En el primer caso (segunda vivienda vacía) esta operación tributa como “régimen de imputación de rentas” . En este caso, el hecho de que se esté pagando un préstamo hipotecario carece de trascendencia fiscal, ya que las cuotas abonadas a Hacienda no se pueden deducir. La imputación de rentas inmobiliarias se obtiene de aplicar un 1,1% ó 2% al valor catastral del inmueble en general, sin consideración como gastos deducibles los generados por el préstamo hipotecario.

- En el segundo caso (segunda viviendas en alquiler) las rentas percibidas en concepto de alquileres por los propietarios tributan como “rendimientos de capital inmobiliario”. Puede

darse el caso de que para pagar esa segunda vivienda haya habido que contratar un préstamo con garantía hipotecaria, y que en el mismo se impusiera por el banco una cláusula suelo que ahora se devuelve por sentencia.

En este caso, también habría que hacer una declaración complementaria por lo deducido de más si hay devolución de cantidades en virtud de la cláusula suelo. Los intereses de capitales ajenos invertidos (los intereses de préstamos hipotecarios, por ejemplo) para la adquisición o mejora de la vivienda alquilada se pueden deducir de los ingresos que el arrendador perciba de su inquilino. Si se dedujo de más porque se aplicó la cláusula suelo cuyas cantidades ahora se devuelven, hay que hacer una declaración complementaria reduciendo estas cuantías en la parte devuelta.

Atención, en todos los casos descritos, si consecuencia de la corrección practicada en declaraciones complementarias hubiera que pagar más a Hacienda (algo en principio lógico dado que si restamos menos deducción, habrá más ingreso), a esa cuantía que pagamos ahora de más respecto de la que pagamos en su momento habría que sumarle los intereses de demora. Para saber cuál es la cuantía sobre la que calcular intereses de demora, debemos comparar la cuota final a ingresar de ambas declaraciones (la realizada en su momento y la complementaria posterior) y sobre la diferencia de ambas es sobre la que habrá que calcular los intereses de demora. Esta aplicación de intereses de demora viene recogida expresamente en la normativa, no es una interpretación de la AEAT. No obstante podría plantearse como una propuesta dereforma y mejora para este colectivo concreto de contribuyentes.

C) GASTOS HABIDOS E INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR EL CONSUMIDOR RECONOCIDOS EN SENTENCIA DE ANULACIÓN Y RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

A diferencia de lo que sucede en el tema analizado de las sentencias que anulan participaciones preferentes, en este caso tales gastos se consideran deducibles. De acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 35/2006 del IRPF, los gastos en que incurra el contribuyente en su demanda contra la entidad financiera por la cláusula suelo (abogado, procurador y tasas judiciales) en cuanto destinados a la eliminación de la misma o a su

minoración, procede considerarlos incluidos en concepto de gastos derivados de la financiación ajena con la que se ha procedido a adquirir la vivienda habitual, por lo que sí constituyen base de la deducción.

Si por sentencia se reconoce el derecho a percibirlos el abogado y procurador del consumidor, estaríamos en el mismo supuesto que el descrito para las participaciones preferentes, sin perjuicio de que, como digo, se puedan deducir.

Por último, si en sentencia hay reconocimiento de indemnización a favor del consumidor estaríamos asimismo en el supuesto que el ya analizado para las participaciones preferentes.